

Conflicto armado y proceso organizativo en el Pacífico sur colombiano¹

Eduardo Restrepo²

El 19 de septiembre de 2001 en horas de la tarde, a pocos metros de la entrada de la Iglesia, un sicario disparó a quemarropa ocho veces contra la hermana Yolanda Cerón. Minutos después, moría la religiosa en el hospital. Hacía exactamente un año que los paramilitares habían arribado a la ciudad de Tumaco, en el Pacífico sur. No era la primera persona que asesinaban en aras de imponerse, pero con el asesinato de la Hermana Yolanda se marcó un hito en el imaginario colectivo y un punto de quiebre en el movimiento organizativo.

Sólo hasta hace poco más de diez años, los analistas consideraban al Pacífico colombiano un ejemplar paradigma de paz en un país desgarrado por la guerra y violencia (Rosero 2002, Wouters 2001a, 2001b). A diferencia de casi la totalidad del territorio colombiano, la región del Pacífico se había mantenido al margen de la escalada militar, de la economía del terror y de la violencia como mecanismo privilegiado de resolución de conflictos. No era gratuito, por tanto, que el Pacífico fuera considerado un 'remanso de paz' (Arocha 1993).

Estas condiciones cambiaron. Los diferentes actores armados, imbricados de disímiles formas de producción y comercialización de drogas ilegales, se empezaron a disputar a sangre y fuego uno a uno los ríos, playas, poblados y bosques de toda la región. Desde el río Atrato, en el extremo norte, hasta Tumaco en la frontera con el Ecuador, el Pacífico colombiano es hoy un febril escenario de guerra, en el cual se suceden masacres y se expulsa la población local que huye para salvar sus vidas. Cientos de miles de desplazados provenientes del Pacífico han arribado buscando refugio a diferentes ciudades del país para descubrirse en una situación de abierto abandono y desesperanza.

Como en cualquiera de los rincones del país, en la región del Pacífico la generalización de la confrontación armada, el posicionamiento del narcotráfico y la existencia de unas instituciones estatales ampliamente deslegitimadas ha tenido efectos des-estructurantes en los tejidos sociales y agendas de las poblaciones

□

¹ Texto preparado para Austin, Texas. Febrero 22 de 2010, en el marco del programa de Visiting Resource Professor del LLILAS, Universidad de Texas. Este texto se basa en una investigación adelantada con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia durante el 2004-2005. Los resultados de tal investigación han sido complementados y las interpretaciones presentadas han sido reelaboradas a la luz de los nuevos desarrollos.

² Profesor asociado. Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar. Universidad Javeriana.

locales. Pero en el Pacífico los efectos de la escalada del conflicto han sido más perversos en la medida en que revierten un inusitado proceso de empoderamiento organizativo de los afrodescendientes en la reivindicación de sus derechos territoriales y culturales como grupo étnico. Este paradigmático proceso organizativo de las comunidades negras³ del Pacífico había logrado concertar exitosamente con el Estado un marco legislativo que sentaba las bases no sólo para un régimen de propiedad colectivo que cubre gran parte de la región,⁴ sino que también perfilaba los elementos de modalidades de poder local que posicionaban a las organizaciones locales (étnico-territoriales o consejos comunitarios) como interlocutores decisivos en las decisiones que involucraban a sus comunidades (Asher 2009, Escobar 2008).

El presente texto busca identificar las implicaciones de la irrupción y generalización del conflicto armado para el proceso organizativo étnico-territorial de comunidades negras en la región del Pacífico sur colombiano.⁵ Para el Pacífico sur colombiano, el grueso de los estudios realizados hasta ahora describen e interpretan diferentes aspectos de las tempranas dinámicas organizativas asociadas a la etnización de las comunidades negras, pero no se le ha prestado la atención suficiente a la última década y los efectos de la escalada del conflicto armado en la transformación de las estas dinámicas.⁶ Mi hipótesis de trabajo es que las condiciones de posibilidad sobre las que se edificó el proceso organizativo étnico-territorial de comunidades negras se han transformado radicalmente en los últimos años con la irrupción y generalización del conflicto armado básicamente asociados al auge del narcotráfico en el área y la intervención del estado colombiano con programas como el Plan Colombia.

Irrupción del conflicto armado

La llegada de los paramilitares se asocia a la disputa militar de la región a la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Desde los años noventa se sabía de la presencia esporádica e intermitente del Frente 29 de las FARC y de Los Comuneros del Sur del ELN, entre algunos municipios del pie de monte de la Cordillera occidental

□

³ Por proceso organizativo de comunidades negras se entiende las dinámicas organizativas ligadas al reconocimiento de los derechos territoriales, económicos y culturales de las comunidades negras como un grupo étnico. Para mayor detalle véase, Escobar (2008) y Asher (2009).

⁴ Para el año pasado, en un documento escrito por la Diócesis de Tumaco se anotaba que en el Pacífico sur se contaba con “[...] como la titulación de 36 territorios colectivos de comunidades afro, con un total de 1.023.370 hectáreas, donde viven 15.713 familias” (2009: 45).

⁵ Por Pacífico sur se entiende aquí las tierras bajas y el piedemonte de la Cordillera Occidental, conformada por los municipios del departamento de Nariño. Por tanto, Pacífico sur y Pacífico nariñense son sinónimos.

⁶ Con las notables excepciones de los trabajos de Almario (2004) y Bravo (2003).

(Barbacoas y Magüi Payán).⁷ Por su parte, la aparición de los paramilitares en Tumaco y las zonas aledañas arrancó en la segunda mitad de 2000 con la incursión de un grupo de 400 hombres, denominado Bloque Libertadores del Sur, comandado por Guillermo Pérez Alzate, conocido como 'Pablo Sevillano' (El País/13/05/2002, Semana 2003). En términos de la cartografía de la guerra, los paramilitares tienen mayor control y presencia sobre las áreas costeras y los centros urbanos, mientras que la guerrilla se mueve en el pie de monte y sus áreas adyacentes (PCN 2001:6). Por su parte, el ejército y la policía tienen asiento en Tumaco y algunos poblados, desde donde despliegan operativos de mediana o gran envergadura. Con la desmovilización el 25 de julio del 2005 del Bloque Libertadores de los paramilitares, emergieron una serie de bandas conocidas como los Rastrojos y las Agilas Negras, que se disputan entre ellas el control del narcotráfico en la zona.

Entre los factores que explican la irrupción del conflicto armado en el Pacífico sur se consideran como los más destacados el súbito incremento de las plantaciones de coca, así como de las actividades relacionadas con su proceso y comercialización: “A finales de los 90 el negocio de la coca, venido del Putumayo, atrae a toda clase de gente y de grupos armados [...]” (Diócesis de Tumaco 2009: 23). Estos factores, a su vez, se concatenan con otros que han influido fuertemente como son los efectos de las estrategias antinarcóticos desplegadas en el marco del Plan Colombia, sobre todo en el vecino departamento del Putumayo, y las repercusiones en lo regional de las dinámicas de la guerra entre los actores. Como lo planteaba enfáticamente un artículo en una conocida revista de circulación nacional: “Todo se agravó después que empezó el Plan Colombia. Éste, como daño colateral, empujó los cultivos de coca hacia el Pacífico. Mientras a Putumayo y a Caquetá les llovía glifosato del cielo, Tumaco se iba llenando de raspachines y laboratorios. Y, por supuesto, de ejércitos que los cuidaban y mataban por ellos” (Semana 2009)

No parece ser gratuito que en unos cuantos años se hagan presentes el conjunto de los actores armados en la región. La eclosión de cultivos de coca es indicada como uno de los factores más relevantes para explicar su repentina presencia y la inusitada tenacidad de las confrontaciones por el control militar de la región. Aunque desde mediados de los ochenta se encontraban cultivos en áreas como el río Satinga y Sanquianga (Bravo 2003), es sólo hasta la segunda mitad de los noventa cuando se extienden y adquieren predominancia en la economía de la región.

Dos aspectos interrelacionados estuvieron en juego en esta eclosión de los cultivos de coca. El primero es la puesta en marcha del Plan Colombia,⁸ cuyo centro de

□

⁷ Para una cronología de las acciones armadas de las guerrillas en la región, ver (Diócesis de Tumaco 2009).

⁸ Según información oficial, las fumigaciones aéreas, dentro del marco del Plan Colombia, comenzaron oficialmente en el departamento del Putumayo el 22 de diciembre del 2000. Hasta el 28 de enero del 2001 se fumigaron alrededor de 29.000 hectáreas; durante el 2001 se fumigaron 94.000 hectáreas. La Policía Antinarcóticos confirmó el incremento de más del

operaciones ha sido el departamento del Putumayo, ha propiciado un traslado de los cultivos y de todo el andamiaje asociado a los mismos hacia otros lugares entre los que el Pacífico nariñense ocupa un lugar destacado: “La mayoría de los cultivos de coca del Putumayo se han trasladado hacia Nariño (municipios de Llorente, Barbacoas y zona rural de Tumaco, principalmente en el río Chagüí) [...]” (Codhes 2003: 4). El énfasis en la fumigación de los cultivos de coca en el Putumayo, así como las intervenciones militares en la región —desprendidas del Plan Colombia como una estrategia de eliminación de éstos cultivos esencialmente represiva y con un tono claramente ligado a la lucha contra la subversión—, fueron presionando a gentes involucradas en las plantaciones a emigrar hacia otros lugares con condiciones más favorables. Algunos de estos colonos y raspachines habían llegado de tiempo atrás de la costa Pacífica detrás de los beneficios de la bonanza coquera del Putumayo. Ante la creciente presión, entonces, muchos de estos decidieron regresar. El grueso de quienes vinieron al Pacífico, sin embargo, eran colonos o raspachines que llegaron al Putumayo desde distantes regiones, muchos de ellos huyendo de la violencia política o económica a la que habían sido sometidos. El caso del poblado de Llorente es muy dicente al respecto:

“Llorente pasó de tener una población que hace dos años no superaba las 1.500 personas, a convertirse en un gigantesco asentamiento invadido por cerca de 20.000 desplazados provenientes de Putumayo y del Caquetá, dice Óscar Seidel Morales, alcalde de Tumaco, quien achaca el fenómeno a los últimos operativos antidroga del Ejército y a la fumigación de los cultivos en esos lugares” (Jiménez 2001).

En este sentido, la eclosión de los cultivos en la región se asocia a la llegada de una ola de gentes, muchas de ellas foráneas, buscando nuevas tierras: “Tumaco llegó a esta situación como reacción al Plan Colombia: la presión que vivía Putumayo es hoy la del puerto” (Castillo 2001). A esto, también se le sumó un cambio en la tecnología de siembra para responder a la estrategia represiva basada en fumigaciones aéreas y en esporádicos despliegues de fuerza militar. En la región de Pacífico se ha implementado una tecnología de siembra de mayor dispersión geográfica de las plantaciones y de reducción del tamaño de cada una de las mismas. Como ha traído como consecuencia “[...] aumento en el número de municipios en donde hay cultivos, aunque estos considerados en su totalidad representen un área menor” (Codhes 2003: 4).

Una tesis semejante de la relación incremento de cultivos ilícitos con la predominancia de los actores armados para el conjunto del departamento de Nariño, es planeada por el mismo gobierno:

□

42 por ciento en la aspersión de cultivos de coca en el 2002, especialmente en Putumayo, donde existían más de 50.000 hectáreas de coca.

“Como factor más importante en la explicación del protagonismo armado adquirido por los actores del conflicto a partir de la primera mitad de la década del noventa, se destaca el crecimiento de los cultivos ilegales. Los frentes guerrilleros que comenzaron a promover la siembra de amapola fueron el 29 y el 8 de las Farc y el Comuneros de Sur del Eln que desde los inicios de la bonanza impulsaron el cultivo entre los pequeños campesinos e impidieron la entrada de grandes productores [...] Al mismo tiempo, las autodefensas rivalizan con la guerrilla al desplegar su presencia sobre la zona productora de coca en el sur occidente del departamento, desde Tumaco hasta El Diviso en jurisdicción de Ricaurte y desde allí hasta Barbacoas para tener el control del Rio Patía hacia el Pacífico pasando por los municipios de Roberto Payán y Francisco Pizarro. Corredor clave para la economía coquera regional en el suroccidente, es la carretera al mar con epicentro en Llorente en Jurisdicción de Tumaco. Hacia el noroccidente del departamento la producción y procesamiento de coca han aumentado al amparo de la presencia preponderante de las Farc en el Charco y Santa Bárbara” (Vicepresidencia 2002: 13).

El otro aspecto se refiere a que la eclosión de estos cultivos debe entenderse como una intervención directa de las guerrillas y los paramilitares propiciando, garantizando y disputando el control sobre estas plantaciones. Esto se ha dado en dos sentidos. Por un lado, estimulando (y a veces presionando) el cultivo entre las gentes que llegan y entre los pobladores locales. Este estímulo ha sido indirecto, al permitir que terceros distribuyan semillas y otros recursos necesarios para adelantar los cultivos (recurriendo al mecanismo del endeude) y luego estableciendo impuestos sobre las cosechas y regulando precios. Del otro lado, el estímulo es directo cuando a través de su mediación se desplazan los pobladores locales de aquellos terrenos aptos para el cultivo de coca, ‘re-poblando’ estas áreas con nueva gente ideológicamente afín para que adelanten las plantaciones (Codhes 2003: 4).

Otro de los factores que explican la presencia de disímiles actores armados y la escalada del conflicto se refiere a lo estratégico de la región para el comercio de drogas, sean estas producidas allí mismo en el Pacífico sur o en otros lugares del país. En efecto, “[s]egún la DEA, 90 por ciento de la droga que sale de Colombia lo hace por vía marítima, de allí que quien domine las costas del país tendrá el poder ya que todos los narcos se verían obligados a negociar con ellos” (Semana 2003). Es la posición geográfica de la costa nariñense una de las más adecuadas para este comercio, no sólo por el creciente procesamiento del alcaloide en este departamento, sino por su vecindad con el Putumayo y el Ecuador. La morfología de la costa del Pacífico sur, atiborrada de esteros y manglares, cruzada por innumerables ríos y afluentes que se internan en lo más profundo de las selvas, facilita la operación de lanchas extra rápidas con las cuales se puede sacar el alcaloide hacia centro América y, de allí, hacia Norteamérica.

Igualmente, el continuo fluir de botes que transportan la madera proveniente de las decenas de aserríos facilita el camuflaje de la droga hasta el puerto de Buenaventura. En este fluir de drogas, también se cuentan las provisiones para el procesamiento y las armas, las que se pueden fácilmente introducir desde el Ecuador, siguiendo la filigrana de esteros o por tierra, o desde el puerto de Buenaventura en los botes o lanchas descritas. El Pacífico ecuatoriano pasó a desempeñar el papel de retaguardia de algunos actores armados, de suministro de logística de guerra y para el procesamiento del alcaloide.

Para miembros de las fuerzas militares, estos factores son los que explican la presencia y escalada del conflicto en el Pacífico nariñense:

“El desplazamiento de los cultivos y laboratorios hacia las selvas de la Costa Pacífica, ha transformado a esta región en el escenario de mayor actividad de narcotráfico en el país’, explicó a SEMANA el comandante de la Armada Nacional, almirante Mauricio Soto. Las cifras de droga decomisada por la Armada hablan por sí mismas. En 2002 las Fuerzas Militares y la Policía incautaron en todo el país cerca de 90 toneladas de coca, de esta cifra la Marina incautó 57,8 toneladas de coca, la gran mayoría en las costas nariñenses. ‘Cuando llegaron los narcos comenzó a llegar la guerrilla y después los paracos, afirma un funcionario de la gobernación de Nariño. Primero llegó el ELN, hace cinco o seis años, pero las Farc los desplazaron. Cuando el frente 29 de las Farc parecía que tenía el control llegaron los paras y hoy son ellos los que dominan el grueso del negocio’, dijo el funcionario” (Semana 2003).

Además de los factores descritos, específicamente para la presencia de los paramilitares en la zona desde las organizaciones populares se ha argüido su vínculo con los industriales de la palma africana. Así, por ejemplo, en un encuentro convocado por las comunidades chocoanas y de Mutatá, en Antioquia, y la organización Human Rights Everywhere:

“Los dirigentes de Tumaco y municipios vecinos manifestaron su preocupación [...] [porque] ‘desde el 2001 han ocurrido 11 ataques paramilitares contra la población civil de las cuencas de ese departamento. Muchos de los argumentos de los agresores estaban amparados en que las tierras debían estar listas para sembrar la palma. Entre 1997 y el 2004 se han registrado 200 asesinatos en la zona, además de innumerables desapariciones y violaciones de los derechos’. La situación es delicada ya que los nativos dueños de tierras han sido despojados de su propiedad a través de ocupación ilegal de hombres armados y sometidos a ‘esclavitud’, obligándolos a trabajar para ellos y pagándoles con vales” (Diario del Sur 2004/02/12).

Como en ninguna otra área del Pacífico, el monocultivo de la palma africana en los alrededores de Tumaco se perfila como una consolidada y prospera actividad de

fuerte inversión.⁹ El gobierno nacional ha puesto sus ojos en el significado de la industria palmera y Tumaco tiene la ventaja de ser puerto desde el cual se puede exportar el aceite y otros derivados. Esto hace que los intereses de los empresarios y del estado entren en la ecuación de la escalada del conflicto en la zona, no tanto por la relación directa con los grupos paramilitares (como ha sido reiterativamente denunciado por los activistas), sino porque constituye un área estratégica de política económica. Es significativo que uno de los proyectos productivos bandera del Plan Colombia concebidos como 'desarrollo alternativo' sea el cultivo de palma africana y resulta muy dicente que Tumaco sea uno de los beneficiarios, a través de Cordeagropaz, de estos recursos que alcanzan los \$2.717 millones (Plan Colombia 2004).

A pesar de que se están empezando a instrumentalizar cultivos de palma africana en otras áreas del Pacífico, sólo en el Pacífico sur esta industria está ya consolidada y tiene el mayor peso entre las actividades económicas legales. De ahí que los intereses empresariales en el Pacífico sur no son una hipótesis (algunas veces fantástica) sobre un futuro dorado, sino concretas y bien significativas para las políticas económicas de orden nacional. Por tanto, es una variable a considerar en la especificidad del despliegue del conflicto armado hasta ahora y en los próximos años. A la relevancia en términos de política económica, debe agregarse lo crucial que ha devenido el Pacífico nariñense en términos de la política de "seguridad democrática" y la estrategia de la erradicación de cultivos ilegales mediante la combinación de la fumigación e intervención militar (Gamboa 2005).

Líderes, organizaciones y proyecto: escalas de los efectos del conflicto

Con una intención expositiva, se podrían diferenciar tres escalas del proceso organizativo de comunidades negras para entender más claramente las diferentes implicaciones de la irrupción del conflicto armado en el mismo: (1) el de los líderes, (2) el de las estructuras organizativas y (3) el proyecto político.

□

⁹ Según Fedepalma, para 1999 en el área de Tumaco existían unas 20.996 hectáreas sembradas. Lo que constituía el 47.6 % del total de la superficie en uso del municipio de Tumaco y el 13.3 % del área total sembrada en palma en Colombia. Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el mundo⁹, aportando Tumaco el 11% de la producción nacional de aceite de palma, con un promedio anual de 16 toneladas/ha (Fedepalma, 1999). Esta área debe ser mucho mayor en la actualidad, entre otras razones porque en los últimos años ha habido una fuerte campaña de extensión de los cultivos desde proyectos productivos (1.500 has) financiados con dineros del Plan Colombia.

En primer lugar, se puede identificar la escala de los líderes de las organizaciones étnico-territoriales o étnico-culturales. Dentro de los líderes se pueden distinguir entre los ‘líderes históricos’ y ‘nuevos líderes’. Los primeros serían aquellos que participaron en el proceso de la definición de la Ley 70, en la creación de las organizaciones étnico-territoriales y en la estructuración de la coordinadora regional (conocida como Palenque Nariño). Los ‘nuevos líderes’ estarían constituidos por quienes han llegado más recientemente a hacer parte de los consejos comunitarios y de las ya consolidadas organizaciones étnico-territoriales. Con respecto a los primeros, cabe anotar que muchos de los que estaban en Tumaco salieron de la ciudad entre el 2001 y el 2002, casi en su totalidad para Bogotá. Algunos salieron desplazados y bajo amenazas, otros debido a diferentes circunstancias menos directamente relacionadas con la escalada del conflicto, pero en medio de la zozobra que causó el asesinato de la Hermana Yolanda Cerón, las amenazas directas sobre algunos de sus compañeros y del desplome del Palenque como entidad coordinadora regional. Esta salida, pensada inicialmente como provisional y por razones de seguridad se tornó permanente para algunos, pero no para todos ya que después del 2005 empezaron a regresar algunos de estos líderes a Tumaco. Por su parte, gran parte de los ‘líderes históricos’ del proceso organizativo que se encontraban en las zonas rurales, han tendido desplegar una estrategia de bajar su perfil y visibilidad en lo local donde hacen presencia los actores armados. Así, como lo argumenta Hernando Bravo en su detallado estudio etnográfico en los ríos Satinga y Sanquianga:

“En la actualidad, los más importantes líderes del otrora Palenque Regional Nariño se hallan en Bogotá en situación de desplazamiento, forzados por la agudización del conflicto armado y por la presencia de actores interesados en el control del negocio que se expande a lo largo de la llanura del Pacífico y que viene transformando los sistemas productivos tradicionales mineros, agrícolas, pesqueros en diversas áreas del litoral Pacífico nariñense. Y, aunque los líderes locales de la Asociación de Consejos Comunitarios de las Zonas Norte y Centro de la Costa Pacífica de Nariño, entre quienes se incluyen los dirigentes de los ríos Satinga y Sanquianga, no han salido expulsados de sus localidades, si han entrado en un proceso de invisibilización estratégica o, en otros términos, se hallan en situación de ‘emplazamiento forzado’ [...] sin posibilidades de promover procesos de movilización comunitaria y de tomar iniciativas políticas para fortalecer sus procesos organizativos en favor de la cristalización de los derechos que la Ley 70 de 1993 les reconoce en sus territorios colectivos” (2003: 134).

De esta manera, un efecto asociado a la irrupción del conflicto en la escala de la dirigencia, específicamente para el grueso de los ‘líderes históricos’, ha sido su salida de la región o su permanencia desde una ‘invisibilidad estratégica’.

No obstante, con respecto a los 'nuevos líderes' este no es necesariamente el caso. Aunque algunos de ellos han tenido que salir o operar desde la 'invisibilidad estratégica' que se acaba de mencionar para los 'líderes históricos', existen muchos 'nuevos líderes' para los cuales la irrupción del conflicto ha significado, precisamente, lo contrario: su posicionamiento. Aunque es muy difícil generalizar, y más aun cuando se piensa en términos de mediano y largo plazo, es un hecho que muchos líderes de consejos comunitarios, sobre todo de aquellos ligados a la naciente RECONPAS (Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur), han logrado posicionar su liderazgo en medio de la escalada del conflicto. Dos son los factores que coadyuvarían a explicar esta aparente paradoja. De un lado, algunos de estos líderes se han enfocado hacia el desarrollo de proyectos de producción (sobre todo los de la palma africana o del coco) a través de organizaciones con fuerte influencia entre los empresarios de la región como Cordeagropaz o de amplia trayectoria como Coagropacífico. En este sentido constituyen unos aliados, por lo menos en lo inmediato, con las intervenciones del capital en la región; diferenciándose en esto claramente de los 'líderes históricos' que eran vistos por muchos empresarios como 'problemáticos' y contrarios a sus intereses. De otro lado, otros nuevos líderes han operado enfocándose localmente en los espacios abiertos por la institucionalidad que no cuestionan a los actores armados ni a quienes se relacionan más directamente con ellos, sean personas de la población local o foráneos. Ante la invisibilización estratégica de los 'líderes históricos' se abren espacios de posicionamiento de estos nuevos líderes.

Por tanto, en la escala de los líderes, el efecto combinado de salida e invisibilidad estratégica de los líderes históricos y el posicionamiento de los nuevos ha significado la consolidación de un relevo generacional de los actuales líderes visibles del proceso organizativo de comunidades negras en lo local y regional. Este relevo generacional, como veremos más adelante, no es un simple cambio de personas, sino también un giro en el perfil de las organizaciones y, más aún, en el proyecto étnico tal como se gestó en los noventa. Además, este relevo no ha estado exento de contradicciones entre los líderes históricos y los nuevos. Estas contradicciones han sido enmarcadas, desde los 'líderes históricos' desde argumentos de 'coaptación', 'oportunismo' y 'falta de perfil' de algunos de los 'nuevos líderes'; mientras que de parte de estos últimos se han esgrimido corrupción y clientelismo de algunos de los primeros.¹⁰

□

¹⁰ Dos puntos ameritan ser clarificados aquí en aras de evitar posibles mal entendidos. Primero, la distinción 'líderes históricos'/'nuevos líderes' es de carácter analítico. No sugiere que todos los 'nuevos líderes' han mantenido una convivencia pasiva con los actores armados o con los proyectos del capital, ni que en todos los 'líderes históricos' se dé necesariamente una confrontación directa con ambos. Mi intención es más explicar las transformaciones y relevos generacionales en las dinámicas organizativas (que no han simplemente desaparecido) en un contexto de conflicto armado y de alta intervención del capital (legal e ilegal) que no existía cuando fue articulado el proyecto a principios de los noventa. Segundo, no quiero tampoco dar la impresión de que estoy considerando que existe un proyecto único y monolíticamente entendido de la lucha por los derechos de las

Los consejos comunitarios y organizaciones en sí mismas y en su accionar constituyen la segunda escala en la cual se pueden analizar los efectos de la irrupción del conflicto armado en la región para el proceso organizativo de comunidades negras. Aunque se pueden identificar algunos consejos comunitarios y organizaciones que se han fortalecido puntualmente en el contexto del conflicto armado (pero no necesariamente debido a éste), en términos generales para la región el efecto de la irrupción de este conflicto ha sido precipitar y profundizar el proceso de *reflujo organizativo* de los consejos comunitarios y organizaciones en su conjunto.¹¹ Después de un monumental proceso de empoderamiento de las organizaciones y sus líderes durante varios años que transformó en múltiples esferas el campo político y de la propiedad sobre la tierra de la región, para finales de los noventa era clara la afloración de ciertas tensiones al interior de las dinámicas organizativas en torno a los ejes de la representación y la concepción de los alcances de su proyecto político. La irrupción del conflicto armado y los factores asociados, hicieron que lo que se insinuaba como una tendencia en el proceso organizativo se precipitara y profundizara.

El reflujo organizativo se consolida de forma directa por la eliminación de los líderes (ya sea asesinandolos, obligándolos a salir de la región o amedrentándolos) o por la prohibición de cualquier actividad de las organizaciones o consejos comunitarios. Este efecto en las dinámicas organizativas por la acción directa de los actores armados es explícitamente enunciado por los activistas del Proceso de Comunidades Negras:

“Desde el año 1998, hasta la fecha han sido tiempos excepcionalmente graves y difíciles para las Comunidades Negras obligada a disminuir su trabajo social, debido a masacres, amenazas, actos violentos y asesinatos, como por ejemplo el caso del Representante Legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, señor Francisco Hurtado Cabezas, a desplazarnos de forma masiva de nuestros lugares de residencia, lucha y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las

□

comunidades negras como grupo étnico en la región. Por supuesto que siempre han habido distinciones importantes no sólo entre las diferentes zonas del Pacífico nariñense, sino también en los diferentes planos que han constituido el movimiento organizativo en la región (incluso al interior de organizaciones que se identificaban como PCN). No es lo mismo como en Satinga se ha articulado este proyecto (antes y ahora) que Tumaco o Barbacoas. Estas diferencias incluyen, además, disímiles formas de empoderamiento local y regional que se instrumentalizan de maneras contradictorias con las nociones de bienestar concretas de las poblaciones y sus líderes.

¹¹ Este planteamiento del reflujo organizativo ha sido desarrollada en detalle en la tesis de maestría del antropólogo Hernando Bravo (2003) para la zona de los ríos Satinga y Sanquianga. De ahí he tomado la noción que, en términos generales, considero aplicable al conjunto de la región del Pacífico sur.

zonas subnormales de las grandes capitales [...] Por lo anterior se requiere que las organizaciones no gubernamentales que han venido siendo solidarias con el Proceso de Comunidades Negras, hoy más que nunca acompañen y contribuyan al no debilitamiento de nuestra lucha, ayudando a garantizar a los compañeros que hoy estamos desplazados unas mínimas condiciones que les permita continuar desde acá con el trabajo de fortalecimiento organizativo a las comunidades que están en resistencia en sus respectivas regiones” (PCN 2001: 3).

Sobre las prohibiciones explícitas, por ejemplo, encontramos que Bocas de Satinga, cabecera del municipio de Olaya Herrera:

“[...] del Proceso de Comunidades Negras no volvieron a hablar ni siquiera sus más representativos dirigentes. A la llegada de los paras, uno de sus anuncios fue que quedaba prohibido cualquier tipo de reunión no autorizada por ellos, al tiempo que incursionaron en la sede de las organizaciones comunitarias campesinas y del proceso, quemando sus archivos y estableciendo un veto para los trabajos de la naturaleza de los desarrollados por estos [...] La mayor parte de ellos han debido aislarse de cualquier actividad política y dedicarse a laborar en diferentes oficios [...]” (Bravo 2003: 142-143, 144).

Además de esta forma directa, el reflujo organizativo se consolida indirectamente ante la irrupción del conflicto armado cuando el entramado institucional sobre el que se había edificado el empoderamiento organizativo deja de operar o se transforma para orientarse hacia el enfrentamiento militar y represivo de actores armados y de las estructuras delincuenciales asociadas al narcotráfico. Para decirlo en otras palabras, de un entramado institucional (compuesto por programas y entidades del aparato de estado así como de las organizaciones no gubernamentales) que se había tornado de cierta manera sensible a las demandas étnicas y que había nutrido con recursos concretos acciones y dinámicas organizativas, con la irrupción del conflicto y de la economía del narcotráfico este entramado institucional desaparece o gira hacia labores referidas ya sea a la represión o a la atención de corte humanitario.

Paulatinamente han ido desapareciendo los proyectos orientados hacia la conservación de la biodiversidad o de manejo sostenible de recursos naturales que durante los noventa fueron cruciales para el flujo de recursos económicos y para el desarrollo de agendas y políticas para el movimiento organizativo (como el Proyecto Biopacífico, el Proyecto Guandal, el Proyecto Naidi o el Proyecto Manglares). Igualmente, han desaparecido espacios mixtos como los Comités Regionales (donde en un varias instituciones estatales confluían con representantes de las organizaciones étnico-territoriales) que alimentaron el empoderamiento del proceso organizativo en la región. Aunque la desaparición de estos proyectos y espacios no se debe directa ni únicamente a la irrupción del conflicto armado, no se puede tampoco afirmar que este no tiene nada que ver en ello. Lo que sí es claro es

que el reflujo organizativo étnico-territorial ha sido agudizado por la falta de las condiciones institucionales ideales sobre las que se gestó y operó en los noventa.

El reflujo organizativo y vulnerabilidad del proceso organizativo en esta región del Pacífico contribuye a dar cuenta de la dificultad de materializar propuestas de resistencia civil como las que han sido desplegadas en el Chocó o en el Valle del Cauca. Ahora bien, este reflujo organizativo no debe entenderse sólo en negativo, esto es, como pérdida y parálisis. También ha implicado la articulación de un importante viraje en las estrategias y discursos organizativos en los cuales se insertan como prioridades la defensa de los derechos humanos y, más particularmente, la defensa del derecho a la vida de estas poblaciones en sus territorios con autonomía y respeto de los diferentes actores armados.

Así, gran parte de los líderes que han salido de la región han continuado con su trabajo organizativo desde los nuevos lugares y en otras esferas del proceso. Es de destacar la consolidación, durante un periodo, de la oficina del PCN en Bogotá con la participación de un buen número de los líderes históricos del Palenque Nariño. Entre otras cosas, esto ha significado no sólo la posibilidad de apuntalar algunas dinámicas organizativas del Pacífico nariñense y de apoyo desde afuera para enfrentar los efectos de la escalada del conflicto armado en la región acercándose a organizaciones no gubernamentales solidarias y moviéndose en las instituciones estatales con asiento en la capital,¹² sino que ha sensibilizado el proceso organizativo en su conjunto sobre cómo asumir políticamente las múltiples dinámicas y experiencias urbanas de la gente negra en Colombia. En este sentido, ese reflujo organizativo perfila también los albores de una reconfiguración y giro del proceso organizativo resituando los derechos de la gente negra como grupo étnico más allá de los supuestos que han prevalecido encarnados en la Ley 70 de 1993.¹³

Proyecto político

Finalmente, el proyecto constituye la tercera escala en la que amerita examinarse los efectos de la irrupción del conflicto armado.¹⁴ Por proyecto se entiende el

□

¹² Véase, por ejemplo, la propuesta elaborada por el PCN para enfrentar la escalada del conflicto armado y la violación de los derechos humanos en Nariño (PCN 2001b).

¹³ Estos supuestos, como han sido indicado por varios autores (Agudelo 2004, Wade 1996), han operado desde una noción de alteridad indianizada, comunializada, ruralizada y Pacífico centrada acuñada en una situación pre-conflicto armado.

¹⁴ En Colombia existen diferentes sectores del movimiento negro, entre las cuales el proyecto al que me refiero es encarnado paradigmáticamente por las organizaciones étnico-territoriales de la región del Pacífico (Escobar 2008). Aunque se ha dado la influencia de otros sectores y proyectos políticos negros, desde los noventa en Nariño ha sido absolutamente mayoritario el proyecto que apela a la articulación del territorio, identidad y cultura de unas comunidades negras como grupo étnico (lo que he llamado en otro lugar *ethnicization of blackness*, Restrepo 2004a). De ahí que el impacto en el proyecto me centre en éste y no en otras expresiones de movimiento negro.

horizonte político hacia el que apunta y que perfila la especificidad el proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico sur. Este horizonte es definido por el conjunto de premisas y propuestas que articulan las prácticas y discursos organizativos de las comunidades negras como grupo étnico, esto es, el entramado de sus políticas culturales. Tal como se consolidó en los noventa, este proyecto se expresaba concretamente en la triple e interrelacionada demanda por el territorio, la identidad y la cultura. Territorio que implica no simplemente el derecho a la tierra, sino un ejercicio de territorialidad colectiva con base en la autonomía que apuntaba la reproducción de la naturaleza y de la comunidad. Identidad como la posibilidad del ser comunidad negra, de la igualdad en la diferencia, de la enunciación de una alternativa de futuro desde la dignificación del pasado y presente compartidos. Cultura como el anclaje y amarre del territorio y de la identidad, como el hacer y el imaginar del ser comunidad negra.

Ahora bien, este proyecto se gestó en unas condiciones de lucha que han cambiado radicalmente con la irrupción del conflicto. En primer lugar, el proyecto supone la operación de una estructura institucional garantizada por un estado de derecho ya que con base en el reconocimiento de ciertos principios constitucionales y actos legislativos, las formaciones organizativas que representaban los pobladores locales podían adelantar una serie de acciones concretas frente a otros actores e intereses en aras de materializar su triple demanda por el territorio, la identidad y la cultura. En otras palabras, las dinámicas organizativas suponen un margen mínimo de ejercicio de la democracia y de respeto del estado de derecho desde puedan esgrimir los derechos étnico-culturales sancionados por la ley (Agudelo 2002, Almario 2004). Con la irrupción del conflicto, los actores armados que disputan desde la ilegalidad la legitimidad del estado de derecho y en el contexto de una economía criminalizada, ya no es viable para la apelación a los mecanismos institucionales y jurídicos en aras de garantizar este proyecto. El lenguaje de la guerra y de la 'ilegalidad' desde el que hablan ciertos actores en la región, socava las condiciones de posibilidad de un proyecto que supone una apuesta a las transformaciones de relaciones de poder a través de la movilización social en aras de redefinir el marco mismo de la institucionalidad (Oslender 2004: 38).

En segundo lugar, el proyecto supone un conjunto de prácticas y expectativas por parte de las poblaciones locales que han ido cambiando de forma acelerada en los últimos años. Las prácticas hacen referencia a las modalidades tecnológicas, las relaciones y la racionalidad económica considerada como tradicionales en estas poblaciones. Estas 'prácticas tradicionales de producción' se asumen como reproductoras no sólo de una relación armónica con la 'naturaleza' y garantes de la conservación de los 'valores culturales de la comunidad' vitales en su manejo territorial. Las expectativas se refieren al contenido concreto de las nociones de bienestar individual y colectivo en el inmediato, mediano y lejano plazo. En otras palabras, estas expectativas constituyen los contenidos concretos de la voluntad colectiva de futuro. La doble articulación de estas prácticas y expectativas constituye el sustrato económico-social sobre el que se constituye el proyecto.

Con la irrupción del conflicto y, sobre todo, con la creciente dominancia de la economía ligada al narcotráfico este sustrato se ha ido erosionando. De un lado, las denominadas ‘prácticas tradicionales de producción’ han sido golpeadas con mayor o menor intensidad dependiendo de la fuerza con que se han posicionado los cultivos de coca y las actividades ligadas a la producción y comercialización de los productos derivados. Como lo anota un documento de la Diócesis de Tumaco: “[...] la economía tradicional en los diferentes municipios de la Costa Pacífica de Nariño, hace unos 10 años ha sido invadida y parcialmente sustituida por el cultivo de la coca y su economía conexas” (2009: 18). Del otro lado, con las actividades económicas tradicionales y las relaciones desde las cuales se despliegan han sido impactadas ante la situación de guerra por razones que van desde el emplazamiento forzado, la desaparición de la demanda de productos locales o la avalancha de mercancías que llegan con el auge coquero. Además, con dineros del Plan Colombia, y bajo el impulso de Cordeagropaz, se han consolidado la siembra de palma africana por los pobladores locales.¹⁵ Con respecto a las expectativas la situación no es alentadora. Los patrones de consumo y los mecanismos de prestigio social se ligan cada vez más, y sobre todo en las nuevas generaciones, a nociones de bienestar individual que se hacen incompatibles, cuando no antagónicas, con las definidas en el proyecto del proceso de comunidades negras.

En este sentido, se hace muy relevante el marco analítico propuesto por Oscar Almario (2004) sobre la contradicción cualitativa entre el emergente modelo económico-social (denominado modelo de nueva economía) y los otros dos existentes en la región (el modelo extractivo clásico y el modelo alternativo que constituiría el sustrato económico-social del proyecto). Hablando del conflicto, Almario plantea que en

“[...] su dimensión económica se refiere [...] [a] la superposición y competencia de modelos contrastivos y sus respectivos agentes: el modelo extractivo clásico de los agentes externos (nacionales y extranjeros), que se apalancó siempre en el paradigma etnocéntrico; el modelo alternativo de la gente negra, en el pasado de hecho y baja conciencia, en la actualidad en una fase de transición y con la esperanza del control territorial y desarrollo autónomo y el *modelo de nueva economía* que, aunque precede a la situación actual de guerra se

□

¹⁵ Según cálculos oficiales, “Hasta 1999 existían 20.000 hectáreas plantadas, de las cuales 126 predios con un total de 2.783 hectáreas corresponden a pequeños agricultores y 10 predios con un total de 14.096 hectáreas, a grandes Palmicultoras, entre ellos Astorca y Palmas de Tumaco. Igualmente la Corporación para el desarrollo agroindustrial Cordeagropaz adelanta en la actualidad un proyecto de siembra de 4.000 hectáreas con pequeños agricultores” (Corponariño 2001: 77-78). Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia se ha profundizado con los recursos enmarcados en el Plan Colombia. Para el análisis etnográfico de las transformaciones en las prácticas y relaciones sociales de los pobladores locales acarreadas por el cultivo de la palma africana en la región, véase Restrepo (2004b).

ha acelerado con ella y en el que se entremezclan elementos del extractivismo clásico más ‘salvaje’, los ilícitos, delincuenciales y paraestatales con las expectativas del capital transnacional y el contexto global. De estos tres modelos, el de *nueva economía* representa un cambio cualitativo en las condiciones económico sociales de la región, en tanto transformativo, con lo cual se anuncia el total trastrocamiento de las relaciones sociales en su conjunto y de las étnicas y culturales en particular” (2004: 96- 97).

Las transformaciones en este sustrato económico-social del proyecto definido por el proceso de comunidades negras han sido tales —como fue inicialmente sugerido por Carlos Efrén Agudelo (2002) y luego por otros autores (Escobar 2004, Villa 2003)— que la integración a un proyecto moderno de nación que no se había logrado desde la independencia colonial y en lo que habían fracasado innumerables proyectos de desarrollo diseñados en las últimas tres décadas para la región, se ha consolidado en unos cuantos años mediante la triste combinación de “*plomo, coca y plata*”.

No obstante, con respecto a la erosión del sustrato económico-social deben tenerse en cuenta dos aspectos. De un lado, no es un proceso homogéneo ya que ha impactado de forma diferencial a la región. Esto es, los efectos del ‘modelo nuevo de economía’ en el sustrato económico-social del proyecto no tienen el mismo calado en la ciudad de Tumaco o en el poblado de Llorente que en el Parque Natural Sanquianga. De otro lado, este avance del ‘modelo nuevo de economía’ y la consecuente erosión del sustrato económico-social no es absoluto ni ha borrado de un tajo relaciones y racionalidades que han estado presentes en estas poblaciones desde generaciones atrás. Mas bien, las ha subsumido o reorganizado bajo un ensamblaje en el cual se perfila su dominancia, pero no estamos ante un fenómeno de tabula rasa.

Por último, se puede identificar transformaciones demográficas sustantivas en algunas áreas del Pacífico nariñense que modifican las condiciones de posibilidad desde las cuales se venía desplegando el proyecto. El proceso organizativo se adelantaba desde la premisa de una dominante presencia (entre el 90 y 95%) de poblaciones locales negras que se habían asentado desde hacía varias generaciones y que habían consolidado de hecho una apropiación sobre el territorio. Este sustrato demográfico del proyecto ha sido impactado de dos maneras. De un lado, se encuentran los procesos de desterritorialización y desplazamiento. Los procesos de des-territorialización entendidos no simplemente como la salida forzosa de las tierras y residencias, sino mas bien como la imposibilidad del ejercicio territorial ya sea por el abandono temporal o permanente de los pobladores ya sea por la restricción de la movilidad de personas y cosas¹⁶ así como por la incapacidad desde

□

¹⁶ Las restricciones a la movilidad sobre cuerpos y objetos, que algunos activistas han denominado emplazamiento forzado (Rosero 2002), son explícitas cuando se asocian a las

las prácticas de los pobladores locales y de sus formas organizativas de definir una autonomía, apropiación y control sobre su territorio (Oslender 2004: 43). En últimas, estos procesos de des-territorialización producen no sólo gente desterritorializada, sino también territorios sin gente (Almarío 2004: 91). La des-territorialización es uno de los efectos más resaltantes de la irrupción del conflicto armado en el Pacífico nariñense.¹⁷

De otro lado, se da una creciente presencia de gentes provenientes de diferentes partes del país, pero especialmente del Putumayo, de Antioquia y del Valle del Cauca. Estas transformaciones son más palpables en los centros urbanos. En poblados como Tumaco, Llorente, El Charco o Bocas de Satinga los foráneos, principalmente los *paisas*¹⁸, han tomado el control del comercio. En Tumaco, por ejemplo, “[...] han montado fachadas de grandes almacenes, han desplazado a los comerciantes nativos, han creados grandes cadenas de almacenes de electrodomésticos, almacenes de ropas y calzado, así mismo como supermercados, se han constituido en red o asociaciones de comerciantes. [...]”¹⁹

A pesar de que en esta ola de colonización coquera participaron algunas personas del Pacífico sur que habían migrado al Putumayo para aprovechar los beneficios económicos inmediatos que esta bonanza acarrea, el grueso de personas involucradas en esta ola de colonización pertenecían a otras regiones del país, desde los más modestos colonos expulsados por procesos de violencia política o económica hasta los medianos y pequeños ‘empresarios’ en busca de un súbito enriquecimiento.

□

prohibiciones de enunciadas por los actores del conflicto como parte de la disputa sobre el control territorial.

¹⁷ La necesidad de dar cuenta de las especificidades de los movimientos físicos de poblaciones o individuos en el Pacífico nariñense desprendidos del escalamiento del conflicto es indicada por la antropóloga Stella Rodríguez: “En la costa nariñense los desplazamientos de tipo masivo son escasos, la mayoría de desplazamientos son de carácter individual y familiar. Por otra parte, los desplazamientos forzados se hacen entre veredas y no hacia cascos urbanos, lo cual hace muy difícil su detección y atención, más aun si se tiene en cuenta que los desplazamientos no son definitivos, sino transitorios, de acuerdo al movimiento de los actores armados. Los desplazamientos del 2002, por ejemplo, fueron temporales. En El Charco y La Tola los pueblos quedaron prácticamente deshabitados [...] pero luego la gente retorno de las veredas y de ciudades como Cali, Buenaventura y Guapi” (2003: 1).

¹⁸ En el Pacífico sur, *paisa* significa generalmente alguien del interior del país que no es serrano (esto es, del área montañosa de Nariño). Así, a vallunos, antioqueños y bogotanos se los considera igualmente como *paisas*.

¹⁹ Entrevista con líder tumaqueño, 03/12/2004.

Conclusiones

El proceso organizativo de comunidades negras en la región del Pacífico sur había logrado, en menos de una década, el reconocimiento de sus derechos de propiedad colectiva sobre gran parte de lo que hasta entonces aparecían a los ojos del estado colombiano como tierras baldías, insertando la identidad cultural y las organizaciones étnico-culturales como referentes desde los cuales se pensaba la región y se empezaron a definir las subjetividades de muchos de sus pobladores. Todo parecía indicar que el empoderamiento de las organizaciones de carácter étnico apuntaba a consolidar una nueva modalidad de ordenamiento territorial y de interlocución en lo local y regional.

No obstante, la escalada del conflicto entre diferentes actores armados imbricados de disímiles formas con la producción y comercialización de narcóticos, ha ocurrido con una celeridad inusitada, transformando radicalmente la región del Pacífico sur en unos cuantos años e impactando de múltiples maneras a los pobladores locales y sus dinámicas organizativas. Los efectos de la irrupción del conflicto armado y el auge del narcotráfico en la región al igual que las estrategias estatales de su confrontación han transformado significativamente los sustratos demográficos, socio-económicos, institucionales y políticos en los cuales se articuló el proceso organizativo de comunidades negras en la década de los noventa. En este sentido, la región ya nunca más será la misma. No cabe la menor duda que el Plan Colombia ha sido un importante catalizante del conflicto en el Pacífico sur debido al desplazamiento de actores y cultivos desde el Putumayo a Nariño.

Ahora bien, las implicaciones de que actores armados como las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares se disputen la región del Pacífico sur deben examinarse en diferentes planos. Mientras que algunas de estas implicaciones han sido inmediatas y pueden directamente asociarse a su presencia y disputa, otras hay que examinarlas en un mediano plazo y más como ‘efectos colaterales’ o indirectos. De la misma manera, mientras unas involucran a determinadas esferas del proceso organizativo, pueden no impactar de la misma forma otras esferas. Aunque en general apuntan hacia la ruptura y la pérdida, no deben analizarse simplemente en negativo porque a propósito de éstas se han articulado respuestas y estrategias que deben ser igualmente objeto del análisis. Al igual que sería un error analítico y político endosarle todas las dificultades del proceso organizativo de “comunidades negras” en la región a la súbita escalada del conflicto, sería desatinado subestimar sus efectos.

Otro aspecto nodal del análisis es que no se puede desligar los impactos de este conflicto armado de los procesos a los que se encuentra estrechamente asociado, pero que no son reductibles al mismo. Esto es, es indispensable introducir en el análisis de los efectos las transformaciones de la economía y la demografía de la región ligadas al narcotráfico, así como éstas en el lugar que ocupan en las dinámicas más generales de las estrategias de la guerra en Colombia que han tomado los diferentes actores armados, incluyendo al aparato de estado.

Referencias citadas

- Agudelo, Carlos. 2002. "El Pacífico colombiano: de 'remanso de paz' a escenario estratégico del conflicto armado". En *Cuadernos de Desarrollo Rural*, No. 46, Universidad Javeriana, Bogotá: 5-38.
- _____. 2004. "No todos vienen del río: Construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia" En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 171-192. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Almarino, Oscar. 2004. "Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y 'multiculturalismo' de Estado e indolencia nacional" En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 71-118. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Arocha, Jaime. 1993. "Chocó: paraíso de paz" En: Astrid Ulloa (ed.), *Contribución africana a la cultura de las américas*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología-Biopacífico.
- Asher, Kiran. 2009. *Black and green. Afrocolombians, Development, and Natures in the Pacific Lowlands*. Durham: Duke University Press.
- Bravo, Hernando. 2003. "Organizaciones étnico territoriales de los ríos Satinga y Sanquianga: los retos de su lucha por el reconocimiento de la identidad en el litoral Pacífico de Nariño". Tesis de Maestría. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Castillo, Fabio. 2001. Tumaco, agobiada por la mordaza del miedo. Mayo 27. El Espectador.
http://www.elespectador.com/periodismo_inv/2001/mayo/nota1.htm
- CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento). 2003. "Balance del Plan Colombia en la frontera de Colombia con Ecuador: Contraproductos y Crisis Humanitaria". Bogotá.
- Corponariño. 2001. "Plan de gestión ambiental regional 2002-2012". Pasto. 251 Págs.
- Diario del Sur. 2004. Denuncias en encuentro del litoral. La siembra ilegal de palma perjudica a afrodescendientes. 2 diciembre.
- Diócesis de Tumaco. 2009. "¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la Región del Pacífico Nariñense". Tumaco.
- El País. 2002. Nariño, expulsor de desplazados. Mayo 13.
- Escobar, Arturo. 2008. *Territories of difference. Place, movements, life, redes*. Durham: Duke University Press.

- _____. 2004. "Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano" En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 51-70. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Fedepalma. 1999. *Censo nacional de palma de aceite, Colombia 1997-1998*. Bogotá: Fedepalma.
- Gamboa, Oscar. 2005. "Coca y grupos ilegales desestabilizan a Nariño" Diario el País, Cali. Febrero 12.
- Jiménez, Germán. 2001. Llorente, nuevo campo de batalla. El Espectador, Jueves 31 de mayo.
- Oslender, Ulrich. 2004. "Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas". En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 33-50. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Plan Colombia. 2004. "La palma de aceite, un proyecto sostenible" viernes 9 de enero. Noticias. [Pagina electrónica consultada 14/02/2005 <http://www.plancolombia.gov.co/programas/campo/index.asp?vinculos=1¬iciaID=514&programa=5>]
- Proceso de Comunidades Negras (PCN). 2001. "Solicitud de apoyo a la urgencia de Nariño" Presentado a ILSA. Documento. Bogotá, noviembre 25.
- Proceso de Comunidades Negras (PCN). S.f. 2001b. "Propuesta integral de emergencia en la Costa Pacífica nariñense para enfrentar la grave crisis humanitaria". s.l. Borrador de trabajo. 9 pags.
- Restrepo, Eduardo. 2004a. Ethnicization of blackness in Colombia. *Cultural Studies*, 18 (5): 698-715.
- Restrepo, Eduardo. 2004b. Un océano verde para extraer aceite: hacia una etnografía del cultivo de la palma africana en Tumaco. *Universitas Humanistica*. 38 (58): 72-81.
- Rodríguez, Stella. 2003. "Desplazamiento forzado" Documento de Trabajo. Julio. Tumaco. 5 págs.
- PCN. 1998? LA COSTA PACIFICA DE NARIÑO Y LOS DERECHOS HUMANOS
- Rosero, Carlos y Libia Grueso. 1994. "El Proceso de Comunidades Negras, PCN" Documento para la presentación del PCN a ONG's nacionales e internacionales. Buenaventura. 7 Págs.
- Rosero, Carlos. 2002. "Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa". En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e identitarias*. pp. 547-560. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS.

- Semana. 2009. El 'tsunami' de Tumaco. 18 de mayo.
- _____. 2003. La narco-guerra. Bogotá. Mayo 6.
- Vicepresidencia. 2002. *Panorama actual de Nariño*. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bogotá.
- Villa, William. 2003. "El territorio de comunidades negras, la guerra en el Pacífico y los problemas del desarrollo" En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.), *Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico*. pp 331-342. Bogotá: ICANH-Universidad Nacional de Colombia.
- Wade, Peter (ed.). 2002. The Colombian Pacific in perspective. *The Journal of Latin American Anthropology*. 7(2).
- _____. 1996. "Identidad y etnicidad" En: Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa (eds). *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. pp. 283-299. Bogotá: Cerec.
- Wouters, Mieke. 2001. Ethnic Rights Under Threat: The Black Peasant Movement Against Armed Groups' Pressure in the Chocó , Colombia. *Bulletin of Latin American Research*. 20 (4): 498-519.